

Intervención aprobación levantamiento secreto bancario UAF en PL sobre inteligencia económica.

Hemos insistido en que la Comisión de Seguridad Pública es una comisión técnica. El tema de la seguridad requiere que demos una respuesta concreta y eficaz a la amenaza del crimen organizado y en este último año hemos avanzado en diferentes leyes que endurecen la persecución y condena de los autores materiales de los delitos, pero estos seguirán siendo reemplazados mientras no vayamos contra los que se lucran de estos delitos y los financian.

En este sentido, ahora estamos discutiendo específicamente el levantamiento del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero. Este organismo es altamente especializado y cuenta con sólo 84 funcionarios para cumplir una función fundamental, que es levantar alertas al Ministerio Público respecto a operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activo por el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo. Además, la misma UAF es auditada cada tres años por la GAFI, que es una asociación de unidades similares alrededor del mundo.

En el trabajo de la mesa técnica con el Ejecutivo se establecieron varios mecanismos de control que quiero resaltar para despejar caricaturas que se han hecho por otros senadores -no de esta comisión, en todo caso-:

Primero. El levantamiento del secreto tiene que hacerlo el Director de la UAF a petición del Jefe de División de Inteligencia. Hay que recalcar que estos dos funcionarios, no sólo el Director, son nombrados por alta dirección pública y, por tanto, existe garantía de que será una decisión tomada técnicamente y una alta probabilidad que sean personas nombrados en distintos gobiernos. Además, no es toda la UAF los que pueden conocer la información, sino que sólo los funcionarios de la división de inteligencia.

Segundo. Se dejó establecido expresamente que la información se manda al Ministerio Público, si existe motivo, o se destruye, prohibiéndose que sea ocupada contra otras personas o en otros procedimientos. En consecuencia, los datos sobre lavado de activos estarán temporalmente en la UAF y luego quedan bajo el secreto de la investigación de la Fiscalía.

Tercero. La eventual violación del secreto quedó sancionada penalmente con cárcel, administrativamente con destitución y expresamente se consignó que el funcionario sería responsable civilmente de los perjuicios.

Cuarto. Por último, se estableció una medida de control que no hemos utilizado para ninguna otra actividad de inteligencia dentro del Estado. La información sobre la cantidad de veces que se ha levantado el secreto bancario en un determinado período de tiempo. Esto permitirá al Congreso pedir explicaciones cuando se detecte que se esté abusando del mecanismo, pero también nos permitirá hacer lo contrario: exigir que se utilice cuando la situación del país nos indique que no estamos combatiendo eficazmente el crimen organizado. Esto lo digo con un motivo muy específico. De acuerdo con la última evaluación internacional de la UAF, ésta habría pedido el levantamiento del secreto bancario sólo 12

veces entre el 2015 y el 2019. Para los integrantes de la Comisión de Seguridad, que nos ha tocado ver la realidad del crimen organizado y el terrorismo, debiera parecernos completamente insuficiente esta cantidad y puede ser explique cómo hemos llegado al punto que nos encontramos actualmente.

Por estos motivos, votaré a favor de la propuesta que presenta la mesa técnica de asesores, ya que se trata de un trabajo serio y estudiado en que se acomodaron diferentes miradas y barre con caricaturas que se han hecho sobre la importancia del levantamiento del secreto bancario para combatir la criminalidad.

INTERVENCIÓN VOTACIÓN TERCER TRÁMITE DEL PL QUE CREA EL MINISTERIO DE SEGURIDAD

Quiero leer un fragmento que considero relevante para entender el contexto de la discusión que estamos teniendo:

“Los problemas relacionados con la seguridad pública, desde hace ya varios años, ocupan un lugar destacado entre las preocupaciones de la opinión pública. Ello se debe, entre otros factores, al aumento de algunos delitos violentos, a la mayor cobertura que los medios de comunicación dan a los delitos, a un cambio de comportamiento de la delincuencia organizada y a una mayor implantación social en ciertos barrios urbanos de las redes de narcotráfico.

Por ello, en el país se advierte la necesidad que exista una autoridad al más alto nivel gubernamental que tenga la seguridad pública como responsabilidad exclusiva o principal”

Estas palabras suenan como si hubieran sido escritas hoy mismo, pero la verdad es que tienen casi 20 años, ya que son las palabras de la Ex Presidenta Bachelet que dan inicio a un mensaje presidencial por el que se creaba un nuevo Ministerio de Seguridad Pública; todo esto el año 2006.

¿Cuánto más profesionalizadas serías las policías si los designios de la Ex Presidenta se hubieran cumplido? ¿Cuánto más pertinentes y exitosas serían nuestras políticas de seguridad? ¿Cuántas bandas de crimen organizado ya habríamos desbaratado o prevenido incluso que se formaran?

No tenemos como saber la respuesta a estas preguntas, pero luego de 20 años parece que estamos llegando tarde. Hubo un sector político que se opuso a la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública frente al proyecto de la Ex Presidenta y han pasado 5 gobiernos desde que este fuera presentado, por tanto mi llamado hoy es que legislemos en este tema con el sentido de urgencia que viene de una responsabilidad compartida que tenemos con la ciudadanía luego de tan largo tiempo sin una institucionalidad robusta en materia de seguridad pública.

En la Comisión de Seguridad Pública hemos hecho un trabajo de detalle viendo qué aspectos de lo que venía de la Cámara de Diputados era una mejora y qué aspectos requieren ser repensados y por, ende, deben ser llevados a Mixta. Esa es la propuesta que hizo la Comisión por mayoría de sus miembros y que llamo a votar favorablemente, ya que permitirá tener una Comisión Mixta centrada en los temas principales y no abrir una discusión eterna sobre aquello en que ya tenemos acuerdo.

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PERMITE LA DETENCIÓN DE SUJETOS CON NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL

I. ANTECEDENTES

De acuerdo a la información de la Organización Internacional de Policía Criminal o INTERPOL, organismo del que la República de Chile forma parte, la notificación roja es una solicitud internacional, dirigida a las fuerzas de orden de todo el mundo, para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición o entrega, o de una acción judicial similar. La persona prófuga puede ser buscada para su enjuiciamiento o para cumplir una condena por delitos graves. No es una orden de detención internacional, pero sí una búsqueda de personas que presuntamente han cometido un delito. Por otra parte, son los países miembros quienes realizan la búsqueda y no la organización internacional de Interpol o los tribunales de justicia.

La notificación roja contiene información para identificar a una persona, como puede ser el nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, color de pelo y ojos, entre otros rasgos fenotípicos. Además, se señala información general sobre el delito por el que es buscado, los que en la esfera nacional podemos catalogar de “de alta connotación social”.

Dado que los países miembros aplican su propia legislación nacional para determinar si pueden detener a una persona, y que los prófugos se radican en países que les den menores posibilidades de extradición, se produce una dificultad jurídica. Dado el elemento territorial en el ámbito penal, por la sola legislación nacional no puede detenerse a una persona que no tiene investigación pendiente en el territorio en el que se ha establecido durante su huida pese a que sea intensamente buscado en la esfera internacional. En otras palabras, *“los delincuentes pueden huir a otro país para intentar sustraerse a la acción de la justicia. Las notificaciones rojas sirven para alertar a los servicios policiales de todo el mundo sobre los prófugos buscados a escala internacional”*¹. Por este motivo, existirían al menos 30 países que tratan, en los hechos, a la notificación roja como una orden de detención².

Entendiendo que la Interpol no puede obligar a los países a la detención de una persona objeto de una notificación roja, se requiere de la colaboración de cada país a fin de resguardar a sus propios ciudadanos frente a la delincuencia, permitiendo el cumplimiento de condenas, por una parte, y evitando la comisión de nuevos delitos, por la otra.

¹ <https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Notificaciones-rojas> (revisado por última vez el 24 de abril de 2024)

² Marino, Nina, & Grantham, Reed (2015) Wanted by interpol: strategic thinking about red notices, diffusions, and extradition. Criminal Justice, 30 (3), p. 7.

Para decretar una notificación roja, la INTERPOL cumple con el Reglamento sobre el Tratamiento de Datos autoimpuesto, facilitándose la información solo para avisar a la ciudadanía u obtener información del público de personas altamente buscadas. Además, sus notificaciones se realizan a petición de los países miembros, ajustándose a la legislación del solicitante y a las disposiciones del estatuto de la institución, al que los países miembros han adherido voluntariamente, así como también a los demás textos normativos de la institución internacional.

Como ya se esbozó, el artículo 83 del Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos estipula las condiciones para la publicación de notificaciones rojas. El delito tiene que ser grave y de derecho común, quedando excluidos los delitos que en algunos países susciten controversias por estar relacionados con normas culturales o de comportamiento³; delitos relacionados con asuntos familiares o privados⁴; y delitos por infracción de leyes o normas administrativos o derivados de litigios privados, a menos que la actuación delictiva esté encaminada a facilitar un delito grave o se sospeche que está vinculada a crimen organizado⁵.

Además, todas las solicitudes de publicación de notificaciones son revisadas para comprobar su conformidad con la normativa de la institución. Cuando se evalúa la conformidad de una notificación, el Grupo Especializado en Notificaciones y Difusiones de la Interpol estudia toda la información disponible, ya sea facilitada por el país solicitante, por otros países miembros o de fuentes abiertas.

³ Por ejemplo: ejercer la prostitución o los delitos contra el honor.

⁴ Por ejemplo: delitos de adulterio, bigamia, poligamia o comisión de actos homosexuales.

⁵ Por ejemplo: infracciones de tráfico, difamación o libramiento de cheques en descubierto (a menos que exista intención dolosa de girar el cheque).



6

Cuando una notificación roja deja de cumplir el Estatuto o las normas de Interpol, por cualquier motivo, esta se anula, comunicando a todos los países miembros la decisión y solicitando se elimine de todas las bases de datos nacionales la información relacionada a dicha notificación.

II. NORMAS RECIENTES

En este mismo Congreso se ha aprobado una modificación al Código Procesal Civil, incluyendo un artículo 127 bis, que permite al Ministerio Público solicitar al Tribunal la detención de aquella persona que tenga vigente una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal. Sin embargo, esto es totalmente insuficiente, ya que es esperable que en un control policial el funcionario pueda hacer la detención sin esta autorización, sin perjuicio de proceder a la audiencia de control de detención respectiva.

Junto lo anterior, el Ministerio Público puede solicitar una ampliación del plazo de detención por 5 días, plazo totalmente insuficiente, para solicitar la detención previa o iniciarse el proceso de extradición.

⁶ <https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Notificaciones/Notificaciones-rojas> (visitado por última vez el 24 de abril de 2024)

Innovando sobre lo anterior, el presente proyecto de ley permite que se pueda detener a quien tenga una notificación roja y que se pueda ampliar el periodo de detención por un mayor plazo con el solo motivo de aquel aviso internacional.

III. IDEA MATRIZ

Reformar el texto constitucional a fin de poder facilitar la detención y posterior extradición de sujetos que están siendo internacionalmente buscados.

IV. PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO PRIMERO: Agréguese al artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República, en su letra c), un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“Con todo, podrá detenerse al extranjero que cuente con una notificación roja vigente de la Organización Internacional de Policía Criminal, dando aviso al juez competente y poniendo a su disposición al afectado. La notificación roja vigente será suficiente para que el detenido sea sometido a prisión preventiva, con la finalidad que sea extraditado al país que solicita su detención”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Agréguese al artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República, en su letra e), un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“La existencia de una notificación roja vigente, emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal, será suficiente mérito para que el imputado permanezca en prisión preventiva, con la finalidad que sea extraditado al país que solicita su detención”.

ARTÍCULO TERCERO: El Presidente de la República podrá enviar un proyecto de ley a este Congreso, dentro de los 120 días siguientes a la publicación de esta reforma constitucional, con la finalidad de ajustar la normativa legal a la presente.